

2015-02-10

Los jóvenes en el medio rural, entre la crisis y la defensa de la memoria biocultural

Muñoz-Villarreal, Óscar

Muñoz-Villarreal, O. (2014). "Los jóvenes en el medio rural, entre la crisis y la defensa de la memoria biocultural". En Análisis Plural, segundo semestre de 2014. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO.

Enlace directo al documento: <http://hdl.handle.net/11117/1567>

Este documento obtenido del Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente se pone a disposición general bajo los términos y condiciones de la siguiente licencia:
<http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf>

(El documento empieza en la siguiente página)

Los jóvenes en el medio rural, entre la crisis y la defensa de la memoria biocultural

OSCAR MUÑOZ VILLARREAL*

Para analizar la situación de los jóvenes en México es ineludible hablar de asesinatos y desapariciones forzadas. Situaciones como la de Ayo-tzinapa nos conminan a abordar esta grave problemática que afecta a este sector de la población. La juventud rural no solo no es ajena a esta situación sino que ha padecido las peores consecuencias de lo que el propio Enrique Peña Nieto llamó una “grave crisis humanitaria”.¹

El 27 de junio 2004 se realizó una gran movilización nacional, llamada *Rescatemos México*, en repudio a la violencia y demandando un alto a la inseguridad. Una década después las cosas han empeorado: aumentaron los secuestros, los homicidios dolosos, los robos, las extorsiones y otros delitos. En su informe 2014 Human Rights Watch indica que el balance de la acción gubernamental es negativo:² los tres poderes de la nación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han fallado en su mandato de garantizar la protección de la población civil, el acceso

* Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y en Ciencias Religiosas por la Universidad Iberoamericana, así como maestro en Agroecología por la Universidad Pablo de Olavide, España. Trabajó durante seis años en comunidades indígenas, en Chiapas, donde colaboró con la Organización Social Xi'Nich'. Desde hace cuatro años colabora con la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias (RASA), en Jalisco.

1. Human Rights Watch, HRW. *Informe mundial 2014. Eventos de 2013*, HRW, Nueva York, enero de 2014, p.95 [DE disponible en: <http://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-chapters/121995>].

2. *Ibidem*, pp. 95-96.

a la justicia y el resarcimiento a las víctimas de delitos, sea por omisión o por corrupción.

¿Cómo llegamos a esto? Para el politólogo Alfredo Jalife-Rahme³ las raíces de esta grave crisis están en la *clepto-mafio-cracia* o, usando un término empleado por los griegos, en la *kakistocracia*, es decir, el gobierno de los peores, que se inició por 1960; problema del que, en la actualidad, los tres grandes partidos políticos son responsables.

Los jóvenes mexicanos se encuentran sumergidos en un *estado fallido*, que atraviesa una *policrisis* o crisis multidimensional: ecológica, social, económica, cultural, política y ética. Es necesario encuadrar esta dolorosa situación en cada una de sus dimensiones para comprender a la juventud rural y poder descubrir, ahí, las alternativas que se vienen construyendo y que han dado saldos positivos.⁴

1. LAS CRISIS DEL ESTADO MEXICANO

México es uno de los doce países megadiversos en cuestión biocultural. La estrategia de los pueblos indígenas, responsables de esta megadiversidad, ha sido la de producir pequeñas cantidades de una gran variedad de especies asociadas. Sin embargo, en el plano mundial, México se encuentra dentro de las áreas críticas amenazadas porque ha perdido 70% de su vegetación primaria, 90% de sus selvas y bosques tropicales húmedos y 50% de sus bosques originales, fenómeno que avanza a un ritmo creciente, pues se pasó de menos de 200,000 hectáreas anuales a principios de los años setenta del siglo XX a más de 300,000 en 2005.

Semejante pérdida no es explicable sin atender a los cambios económicos y políticos que ha enfrentado el país en las últimas décadas, que

3. RT. "Experto: 'No entendíamos que vivimos en un régimen bárbarico. Ayotzinapa nos despertó'", en RT, 28 de noviembre de 2014 [DE disponible en: <http://actualidad.rt.com/actualidad/view/148778-mexico-regimen-barbarico-ayotzinapa-revoluci%C3%B3n>].

4. El análisis siguiente es una reformulación, con datos actualizados, de mi tesis de maestría *Situación de las hijas e hijos de campesinos agroecológicos de la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias*, en Jalisco, México, UPO, España, 2011.

han sido guiados por la lógica neoliberal. La agroindustria y la industria en general han sufrido dos procesos diferenciados como parte del fenómeno de la globalización: por una parte, se han desarticulado las cadenas de producción en favor de las “ventajas comparativas” para las nuevas corporaciones, lo que ha desplazado a pequeñas y medianas empresas que fungían como proveedoras de empresas mayores, a lo que se suma que algunas grandes empresas lograron posicionarse como nuevas empresas trasnacionales cuyo control centralizado determina todos los eslabones de la producción. Esta industrialización de los procesos de la agricultura ha significado la modificación de la diversidad rural mediante el monocultivo, los invernaderos, las semillas híbridas y transgénicas, el riego, los fertilizantes químicos, los plaguicidas y los combustibles fósiles, y ha sido cuestionada seriamente por sus múltiples impactos ambientales, incluyendo: degradación de suelos, contaminación y uso excesivo de agua, emisión de gases de efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad y contaminación por agrotóxicos.

El fenómeno de la “revolución verde”, el alto grado en el uso de tecnología productiva, la presencia de grandes agroindustrias así como complejos industriales de capital nacional e internacional, han despoblado las zonas rurales (donde para 2010 habitaba 22% de la población frente a 57% en 1950) y han concentrado la población en las ciudades (78% en 2010) favoreciendo procesos migratorios hacia el interior del país y hacia Estados Unidos. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) —en 1994— han emigrado 15’000,000 de mexicanos a Estados Unidos para buscar empleo.

Este crecimiento desmesurado de las ciudades no es sino la expresión de “una crisis global, compleja y multidimensional” que afecta por igual al campo y a la ciudad. Por una parte, esta forma de urbanización fragmenta, arrincona y desaparece los espacios rurales y ha acarreado un sinnúmero de problemas ecológicos, sociales y económicos, que se han visto agravados por la concentración poblacional desordenada; la insuficiente e ineficiente infraestructura para gestionar los residuos,

tanto de la población como de la industria; la falta de aplicación de medidas de seguridad ambiental, y la corrupción en el cambio de uso de suelos agrícolas para favorecer a las inmobiliarias y a la industria.

En 1994 solo 15% de la población trabajaba en actividades agropecuarias. Para 2011 la cifra había disminuido a menos de 10%. El abandono del trabajo rural ha traído como consecuencia que 60% de los habitantes rurales viva en pobreza extrema. Por otra parte, el estilo de industrialización y de contratos por intermediarios ha abierto la puerta a una población “flotante” industrial y agrícola cuyos integrantes son víctimas de una permanente inestabilidad laboral.

La entrada en vigor del TLCAN también agravó la dependencia alimentaria. Para 2015 el presupuesto gubernamental agropecuario ronda 2% del producto interno bruto (PIB), mientras que para octubre de 2014 el crédito agropecuario representaba apenas 0.3% del PIB. A su vez, la balanza agropecuaria tiene un déficit que ha crecido hasta alcanzar 358% con respecto a 1993, en tanto que de 1994 a 2014 el aporte de las actividades primarias al PIB ha caído casi 63%.

En promedio el precio de la canasta básica ha aumentado 421% desde que México entró al TLCAN, pero hay productos que acumulan un incremento superior, como la tortilla, con 733%. El maíz aumentó 400% su valor, pero el precio pagado a los agricultores cayó en 58%. Por su parte, el precio del frijol aumentó 300% y el del tomate 2,000%. En tanto, el salario mínimo aumentó solo 274%. Con esta pérdida del poder adquisitivo un salario mínimo actual apenas puede acceder a 30% de lo que compraba en 1970 y tienen que trabajar tres miembros de la familia para que coman cuatro.

Al igual que ha sucedido en otros países, tanto “desarrollados” como “en vías de desarrollo”, la supuesta pérdida de rectoría del estado sobre la economía ha legalizado la transferencia de los costos de los distintos fraudes bancarios y empresariales a la sociedad. El caso más paradigmático es el del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), programa mediante el cual el gobierno asumió las carteras vencidas y capitalizó a las instituciones financieras, destinando el equivalente

a 18% del PIB a lo que se denominó “rescate bancario”. Algunos resultados de esta catástrofe económica son la migración masiva a las ciudades; un acumulado “rencor social” de una multitud de jóvenes sin empleo ni estudio; la indignación de otros tantos jóvenes por la manipulación de los medios de comunicación, los fraudes electorales, la represión y las pésimas condiciones del mercado laboral, así como la pérdida gradual de la soberanía alimentaria.

El neoliberalismo, que ha guiado el “desarrollo” de México desde hace algunas décadas, ha conducido al país a una mayor “vulnerabilidad alimentaria” sin dar importancia al contexto histórico y sociocultural de los productores nacionales, a su situación desventajosa frente a los productores de otras naciones, al aumento en la desigualdad entre el campo y la ciudad, ni al desequilibrio y degradación ambiental que ha ocasionado.

Para los campesinos e indígenas los ideales revolucionarios, expresados en el lema zapatista “Tierra y libertad”, se han ido desvaneciendo, cada vez más rápido a partir de la reforma del artículo 27 constitucional, en 1992, como parte de las políticas de “ajuste estructural” con el cual las tierras ejidales perdieron la protección legal y cultural que gozaban. Sus tierras dejaron de ser inexpropiables, inembargables, inalienables e imprescriptibles; además, dejaron de ser vistas como “propiedad común” para ser consideradas una mercancía que se intercambia. La otra razón tiene que ver también con estas políticas estructurales y está vinculada a la desregulación de los mercados rurales y su entrada al sistema de especulación alimentaria, así como al desmantelamiento de las instituciones y leyes que apoyan al sector agropecuario. Los recursos de los campesinos y los indígenas ahora dependen más de las remesas, que representan 2.2% del PIB, y del cultivo de drogas.

A decir de los productores, aun los de tipo empresarial, eran mejores las condiciones anteriores al cambio de modelo económico. La radical aplicación de una política de apertura y liberación económica y el subsidio forzado del sector agropecuario a la industria y a las

ciudades produjeron una profunda crisis en el campo. Bien se puede afirmar que se trata de un *agricidio* de múltiples dimensiones: social, ecológico, cultural, económico y político.

Y más aún, en México no solo está ocurriendo un *agricidio* sino un genocidio donde, discusiones más o menos, desde 2006 hasta 2012 se podrían contabilizar 150,000 muertos y cerca de 300,000 desaparecidos, cifras que nos acercan a países en que padecen conflictos armados, como Palestina. Uno de los principales problemas es la impunidad que llega a 98.3%, razón por la cual 92% de los delitos no se denuncia. Esto podría elevar el número de muertos y desaparecidos mucho más arriba de las cifras oficiales o estimadas.

La indignación y movilización social se mantuvo en altibajos mientras que los muertos y desaparecidos se ocultaban tras el velo del narcotráfico o de la acción de algunos elementos policiales o militares “corruptos”. Lo acontecido en Ayotzinapa, Guerrero, vino a acabar de sacudir la conciencia nacional e internacional dada la brutalidad —documentada— con que actuó el gobierno municipal, vinculado a la mafia, bajo la omisión del ejército.

Ahora, cuando las marchas y manifestaciones se multiplican por todo el país y por todo el mundo exigiendo justicia y que se encuentre a los 42 desaparecidos en la población guerrerense (los restos de uno fueron localizados en Cocula el 7 de diciembre), los diputados aprueban modificaciones a la carta magna sobre “movilidad social” que se teme acaben criminalizando la protesta social, como lo fue la “ley bala” del estado de Puebla.

En este terrible contexto, los jóvenes se enfrentan, además, a la falta de acceso a la educación y al empleo. Por una parte, la escolaridad promedio es la secundaria, y la educación es de mala calidad; por otra, los frutos de esa escolaridad son desalentadores: 58% está desempleado, 27% en el sector informal y solo 15% tiene un trabajo formal. Según un estudio realizado en el estado de Tamaulipas, de quienes avanzan a un mayor nivel de estudios, 70% no trabaja; del 30% que labora,

50% no lo hace en lo que estudió, es decir, solamente 15% consigue un trabajo en aquella rama en la que se especializó.

Esta situación de falta de oportunidades laborales, de dificultades para progresar y de precariedad económica ha ido generando una *des-ciudadanización* juvenil que promueve más migración, y delincuencia, lo que repercute a su vez en la escolaridad, generando un círculo vicioso.

Rogelio Marcial y Miguel Vizcarra expresan así el problema del imaginario educativo y laboral:

El bajo nivel educativo y la dificultad para obtener una ocupación dignamente remunerada que permita a los jóvenes desarrollarse de forma integral, así como la creciente propagación de la “narco cultura” y los altos niveles de impunidad, son algunos de los factores que intervienen en el resquebrajamiento de la idea que sostiene que la educación, y el trabajo formal, son los principales medios para alcanzar la realización personal. De tal manera que dentro de una cultura consumista, y en el contexto antes descrito, se pueden vislumbrar las razones del incremento en los índices delictivos cometidos por este sector de la población.⁵

Visión que se opone a la sostenida por José Manuel Barceló Moreno, director general de Educación Media Superior de la Coordinación de Educación Media Superior, Superior y Tecnológica (CEMSSyT) de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ), quien afirmó: “Cualquier padre de familia que quiera ver exitoso y triunfador a su hijo, no tiene más remedio que enviarlo a la escuela”.⁶

5. Rogelio Marcial y Miguel Vizcarra Dávila. *Jóvenes y políticas públicas: Jalisco*, El Colegio de Jalisco / Instituto Jalisciense de la Juventud, Zapopan / Guadalajara, 2006, p.66.

6. Esta afirmación la realizó el funcionario en una entrevista en el Canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV), durante el programa *Zona Escolar*, transmitido el 3 de diciembre de 2012, a las 9:40 am.

En el ámbito rural, el sistema educativo, con la formación obligatoria desde los cuatro hasta los 15 años, ha roto los mecanismos de transmisión de conocimientos, la formación de habilidades asociadas con la vida campesina y ha generado una actitud muy distinta y hasta despectiva con respecto al campo y a las personas que viven ahí, que se refuerza por la incesante y eficaz propaganda de un estilo de vida de consumo muy alejado del *habitus* campesino pues contrasta fuertemente con la situación de pobreza y pobreza extrema que ahí se vive, que es mayor que en las zonas urbanas.

Lo que fue una cultura agrícola familiar-comunal y multifuncional se ha transformado en un modelo de agricultura industrial de monocultivos de riego, especialmente hortalizas y pastos, volcada al mercado externo a la región. Esto ha significado la reducción de las superficies de policultivo para la alimentación familiar y la sustitución de cultivos tradicionales de temporal, lo que conlleva una pérdida de agrodiversidad —entendida como la biodiversidad cultivada en los agroecosistemas—: semillas locales de maíz, frijol, calabaza y otras. Esta transformación es responsable de la proliferación de invernaderos y el uso de paquetes tecnológicos para una producción más especializada, así como de la desarticulación de los vínculos entre agricultura, pesca y artesanía.

Un modelo predominante de aprovechamiento intensivo de recursos basado en el monocultivo y en la extracción, los procesos industriales aplicados a la producción agrícola, la deforestación y los desechos de las ciudades y las industrias, han deteriorado continua y sistemáticamente los agroecosistemas y la naturaleza —aumentando su fragilidad— así como las culturas y las formas de vida rurales, homogeneizándolas en su búsqueda de la máxima productividad económica. La pérdida de masa forestal, vegetación en general y agrodiversidad, así como el agotamiento de los suelos, la disminución y contaminación del agua, la baja calidad del aire y de sanidad de los productos agroalimentarios, la transformación del paisaje por los cambios de uso de suelo, los conflictos sociales, las situaciones de ingobernabilidad y el

deterioro de la calidad de vida, entre otros, son indicadores de la grave crisis que atraviesa el país.

El actual “modelo de desarrollo”, del cual esta crisis regional no es sino una muestra, ha afectado a todo el país en términos negativos: la distribución de los beneficios es injusta y se concentra en las grandes corporaciones, mientras que los impactos negativos afectan a los sectores sociales más vulnerables.

2. LAS ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIÓN

Frente a la destrucción ecológica y a la descomposición económica, política y social que se vive día a día en México, han surgido cientos de movimientos sociales que luchan por defender los recursos naturales y el territorio o que impulsan proyectos alternativos de producción agroecológica, como manejo de bosques o producción de café, los cuales, aunque ha sido un proceso lento y difícil, han mantenido su crecimiento.

Las experiencias agroecológicas no se reducen ni se centran en la agricultura y la ganadería sustentables sino que buscan un manejo de los recursos naturales que sea adecuado ecológicamente, incluyendo áreas forestales y conservación de la agro-bio-diversidad; aprovechando los diferentes pisos ecológicos, desde el valle hasta la montaña; mediante una agricultura diversificada, a partir de policultivos, plantas medicinales y herbolaria, productos locales, turismo rural, ecoturismo, Comercio Justo, así como educación ambiental, acciones municipales y defensa de recursos naturales, en equilibrio con el desarrollo urbano.

Las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas poseen el mayor cúmulo de conocimientos, especies y paisajes en el mundo, y México no es la excepción. En sus manos se encuentra la llamada *memoria biocultural*, de la que se nutre la construcción de la mayoría de las alternativas al modelo de civilización depredador.

Los conflictos son uno de los factores que pueden motivar el cambio de la situación existente, por eso, los movimientos sociales ambientales tienen un papel clave en la lucha por la sustentabilidad porque aminoran los efectos de la depredación occidental y construyen formas de vida alternativas que agrandan el camino hacia la sustentabilidad.

En México son muchas las organizaciones que, por problemas socioambientales o por impulsar proyectos alternativos, han recreado sus instituciones sociales (territorio, autogestión comunitaria, cultura, vida colectiva, memoria histórica) y han logrado influir en las políticas estatales y nacionales. Esto es “poder social” de transformación. Se pueden contabilizar alrededor de 300 organizaciones articuladas en torno a ocho grandes redes que se extienden por todo el país.

Algunos de los logros de estas luchas son:

- El mejoramiento del entorno contra la desertificación, la deforestación, la erosión y la pérdida de fuentes de agua mediante procesos de reordenamiento territorial y rediseño de agroecosistemas.
- Creación de nuevos modelos educativos que van acompañados de procesos productivos o luchas sociales.
- La agricultura ecológica, que es la actividad de mayor crecimiento en el sector agrícola, con más de 56 especies en producción en una superficie de más de 400,000 hectáreas y casi 130,000 productores. En términos económicos, su balanza es superavitaria pues, utilizando insumos locales, las divisas por exportación rondan ya los 400 millones de dólares, de los cuales por comercio justo llegan 100 millones de dólares al año a campesinos e indígenas.
- Se ha logrado el establecimiento de ecotiendas y ecotianguis, y su organización en la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos, así como la aprobación de la Ley de Productos Orgánicos en 2006, su respectivo reglamento en 2010 y sus lineamientos en 2013, en los que se incluye la certificación participativa.

- El número de empleos generados a través del “comercio justo” asciende a 172,000, donde la gran mayoría (97.5%) son para campesinos e indígenas, pequeños productores de agricultura familiar, con menos de 30 hectáreas, de los cuales 82% son indígenas de 22 culturas diferentes.

La juventud que ha vivido al cobijo de estos logros tiene un nivel de vida superior al de muchas otras familias campesinas e incluso urbanas, ya que han crecido con alimentos suficientes y sanos y bajo el cobijo de familias integradas que viven una serie de valores como el respeto y el cuidado por su medio ambiente. Estos valores son una de las motivaciones más fuertes que tiene la juventud rural —y la urbana— para la defensa de su entorno y la construcción de alternativas que trasciendan hasta las futuras generaciones.

A pesar de las modificaciones al artículo 27 constitucional los jóvenes que han vivido procesos alternativos en búsqueda de la sustentabilidad tienen un profundo arraigo a su tierra y a sus tradiciones. Estos no solo no han migrado sino que han mantenido la posesión de su tierra o buscan formas de tener acceso a ella, individual o familiarmente.

Frente a la fragmentación social, esta juventud rural, lejos de “atomizarse”, ha mantenido y fortalecido las relaciones que constituyen el entramado del tejido social de su comunidad y ha avanzado hacia el establecimiento y fortalecimiento de estas relaciones con otras comunidades y con la ciudad, en especial con los círculos de “comercio justo” y de mercados orgánicos. Las relaciones y el reconocimiento de que gozan sus familias, sobre todo fuera de su comunidad, significan por una parte ser sujetos copartícipes en la defensa de su comunidad, tradiciones y recursos, y por otra el salir de su comunidad en unas condiciones de valoración y reconocimiento por su trabajo en favor del medio ambiente y de alimentos sanos.

Estos logros han sido posibles con un sistema legal en contra, con una dinámica económica en contra, con una cultura en contra. Esto nos lleva a pensar, como a Víctor Manuel Toledo, que el “potencial organizativo es enorme”⁷ y que está causando, de hecho, “cambios sustanciales en las sociedades”,⁸ cambios en múltiples dimensiones que apuntan a la construcción de otro modelo de civilización.

Frente a la crisis del modelo civilizatorio, expresada en lo político, económico, social, cultural, productivo, ético y ambiental, las propuestas y acciones que se vienen realizando desde el marco de la agroecología dan la mejor respuesta a las demandas del presente y del futuro, donde la juventud tiene un papel fundamental para la defensa de la memoria biocultural, así como para la construcción de otro modelo civilizatorio.

7. Víctor Manuel Toledo Manzur. “Batallas socio-ambientales en México”, ponencia presentada en el Foro Nacional para la Regeneración Socio-Ambiental, en Cuetzalan, Puebla, 21 de marzo 2011 [DE disponible en: http://www.regeneracion.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=939:batallas-socio-ambientales-en-territorios-de-mexico&catid=130:titular-2, consultada el 9 de noviembre de 2012].

8. Víctor Manuel Toledo Manzur. “La agroecología en Latinoamérica. Tres revoluciones, una misma transformación”, en *Agroecología*, vol.6, Universidad de Murcia, Murcia, 2011, p. 44.